

## **Extensión Universitaria y Educación Pública Chilena \***

Juan Pablo Cárdenas S.\*

Dos años atrás, intempestivamente estalló en Chile una gran revuelta de los estudiantes secundarios. En la noche del 18 de mayo del 2006, un grupo de jóvenes entró al emblemático Instituto Nacional para iniciar una prolongada “toma”, acto de rebeldía que rápidamente se reproduciría en muchos otros liceos y colegios de todo el país. Conocido como el *Mayo de los Pingüinos*, este movimiento no fue previsto por las autoridades políticas ni educacionales, como tampoco por los servicios de inteligencia y los medios de comunicación. La mayor operación sorpresa que recuerde nuestra historia educacional, para todos se ha constituido en un hito decisivo en la demanda de los escolares por una mejor calidad docente, infraestructura y renovación de sus programas de estudio.

Después de la consolidación de todo un proceso privatizador en los tres niveles de formación, estos muchachos y muchachas de apenas 15 o 16 años se levantaban para exigir del estado mayor injerencia en la educación y que terminara el lucro como estímulo fundamental del sostenimiento de cientos de colegios y universidades. Un proceso que ha derivado inequívocamente en el deterioro de la instrucción pública, incluso en el surgimiento de muchos establecimientos particulares pagados sin la debida solvencia académica. En un país de agudas inequidades, prácticamente todos reconocen que éstas tienen base en un sistema educacional que discrimina entre pobres y ricos.

La rebelión de los pingüinos conmovió al país entero y los jóvenes líderes rápidamente fueron identificados y apoyados por sus propios maestros y las asociaciones de padres y apoderados. El fenómeno le provocó al gobierno de Michelle Bachelet un agudo problema político, como que tuvo que aceptar la renuncia del Ministro de Educación y convocar rápidamente a una comisión de casi un centenar de expertos para que estudiara y propusiera una nueva Ley General de Educación. Aunque la legislación heredada de la Dictadura no le gusta prácticamente a nadie, hasta hoy se ha hecho imposible, sin embargo, consensuar un nuevo texto entre los diversos actores educacionales y políticos. Las distintas visiones que existen en Chile sobre el tema educacional quedaron claramente

manifestadas en el propio ejercicio de esta Comisión y hoy, en el Parlamento, se aprecia imposible legislar con prontitud al respecto.

Los estudiantes se manifestaban intempestivamente, y con resolución, luego de largos meses de reflexiones y acuerdos logrados sigilosamente por Internet, en un proceso en que a todos nos sorprendió por su ejemplar espíritu democrático y alto grado de disciplina. Aunque finalmente la revuelta se apaciguó con promesas y dádivas a los establecimientos más catastróficos, lo cierto es que a la revolución de los pingüinos despertó o un sinnúmero de estallidos en demanda por recuperar la injerencia que tuvo el Estado chileno en la formación intelectual del pueblo, cuando la consigna política era “gobernar es educar” y los planteles públicos gratuitos entregaban una formación que superaba en índices de desempeño a la privada. A pesar de que esta última siempre contó con importantes subsidios fiscales, además de los recursos propios. Este mismo año, hemos sido testigos de nuevos focos de conflicto y todo está ahora en un tenso compás de espera hasta que el Gobierno y el Parlamento generen una nueva institucionalidad educacional. Desafío que, como dijimos, está empantanado por los profundos desacuerdos y advierte la eventualidad de nuevas y más radicales expresiones de protesta.

En todo el proceso que comentamos, las universidades prácticamente se han mantenido al margen y son parte más del problema que de la solución. Salvo las voces de algunos lúcidos o mediáticos académicos, lo cierto es que la educación superior parece enclaustrada, desentendida de los acuciantes problemas del país, indolente incluso respecto de los propios temas de la educación. Ciertamente que ensimismada en sus propios afanes docentes, acotadas en gran medida a la mera formación de profesionales y cumpliendo con proyectos de investigación definidos por la demanda y el financiamiento de la empresa privada o la academia extranjera.

Nuestras universidades dejaron de ser esa atalaya magnífica de los años 60 o 70 que observaba e intervenía con propiedad y autoridad en el devenir político, social y cultural del país. Cuando tan sólo nueve planteles en el país eran un poderoso agente de cambio y le otorgaban a la extensión universitaria una importancia tan relevante como las otras dos clásicas misiones de la educación superior. En un tiempo en que las reformas que emprendía Chile eran con frecuencia concebidas en las propias aulas y debatidas en los campus antes de ser visadas por los gobiernos o parlamentos. Cuando la dignidad de ser rector, por ejemplo, competía con la del Presidente de la República y las leyes tenían génesis en las universidades después de un diagnóstico acucioso y libre de lo que el país necesitaba.

Así se puede explicar, entonces, que la televisión fuera entregada por ley de la República para la exclusiva administración del Estado y las universidades. En una época en que se proclamaba, reitero, que la educación pública e igualitaria era un imperativo estratégico del progreso y la justicia social. Universidades influyentes en

que hasta los propios resultados electorales de las federaciones estudiantiles marcaban casi inequívocamente los escrutinios de los comicios ciudadanos. En que las ideologías y los partidos de derecha a izquierda se construían desde las aulas, y los líderes políticos más connotados venían de hacer carrera como dirigentes desde sus escuelas universitarias o la propia secundaria. Antes, por supuesto, que el pragmatismo ramplón declarara el “fin de la historia”, la sacralización del capitalismo salvaje y todo derivara en el estado de postración que hoy vive un país re colonizado por la banca extranjera, las transnacionales mineras y empresas que se han hecho propietarias de más del 75 por ciento de todos nuestros recursos hídricos, incluidos los ríos, manantiales y aguas subterráneas.

Intereses enseñoreados otra vez en toda nuestra larga y frágil geografía como en nuestro extenso Océano Pacífico. Que depredan y contaminan ante el horror de nuestros científicos que carecen de los medios de comunicación para expresar siquiera su estupor. Situación que se explica en que estos mismos colonizadores o sus representantes internos hayan adquirido recientemente más del 60 por ciento de las radios chilenas y los canales de televisión deslindados de las universidades. En el evidente propósito de intervenir (como ya lo hacen) contra cualquier intento nacional de recuperar para todos los chilenos soberanía sobre nuestros yacimientos y recursos fundamentales.

Es en el miedo a la libertad y la persecución brutal de las ideas que practicara tan trágicamente la Dictadura Militar en Chile donde se explica que las universidades públicas fueran desmembradas y jibarizadas en su misión y quehacer. La misma voracidad que privatizó y extranjerizó las empresas del estado definió que los colegios y las universidades fueran concebidos como un negocio más a la deriva de la libre iniciativa y del mercado. En esto hoy se explica la existencia de más de 60 planteles de educación superior, cuanto que la formación escolar en los primeros niveles dependa de una infinidad de propietarios cuyo evidente interés es administrarlos al más bajo costo y rentabilizando al máximo el subsidio que el Estado les entrega por alumno matriculado. De esto se ha derivado que los maestros sean mal pagados, que no exista incentivo a la formación de docentes y haya caído dramáticamente el nivel intelectual de los mismos. Al mismo tiempo que pululan las universidades “de pizarrón”, los académicos hora y la oferta irresponsable de carreras que ni siquiera ofrecen viabilidad ocupacional. Como también que, en su afán de lucro, colegios y universidades amplíen irresponsablemente la matrícula, prescindan de laboratorios, minimicen sus bibliotecas y compitan febrilmente por capturar al alumno de estratos altos y con buena capacidad de pago. Despreciando a los que tienen talento y vocación.

Nuestra pública Universidad de Chile -la más antigua y extendida del país- fue convertida por los militares en más de 10 planteles distintos, se le arrebató su gran Pedagógico y fue forzada a establecer aranceles para financiarse, cuanto a competir

lastimeramente por conseguir proyectos investigación de toda índole, tengan o no que ver con el interés o las prioridades del país. De esta forma, quienes estudian en ella ahora pagan prácticamente lo mismo que en las privadas, porque el aporte fiscal no alcanza a cubrir el 25 por ciento de su presupuesto. Esto explica el lamentable deterioro de su tarea de extensión universitaria en que la Orquesta Sinfónica, el Teatro Nacional, el ballet y tantas otras brillantes iniciativas hagan denodados esfuerzos por “vender funciones” y orientar su oferta cultural y artística al objetivo de conseguir auspicios y asegurar taquilla. Tal como su canal de televisión lo tiene hoy endosado a uno de los empresarios y políticos más pudientes del país, mientras que su Radio hace enormes esfuerzos por financiar una programación diversa e independiente, tratando a duras penas de no desnaturalizar su carácter de emisora cultural. Una Universidad, en definitiva, que quiere ser pública, pero que en los hechos está privatizada y ha perdido la gravitación que siempre demostró en la definición del presente y porvenir de los chilenos.

Se ha llegado en nuestro país a una situación tan extrema que una importante universidad pública se vio comprometida por un informe de impacto medioambiental que negaba el efecto ecocida de una determinada inversión forestal. Evaluación “científica” que buscó favorecer a un consorcio ante los Tribunales y que, por supuesto, había sido contratada a la universidad por este mismo grupo económico. Asimismo como nuestra propia Universidad de Chile fue involucrada en el gobierno anterior en toda una operación fraudulenta destinada a mejorar los sueldos de algunos funcionarios públicos, recibiendo recursos que luego disponía para cubrir una planilla de honorarios por trabajos que nunca se realizaron para la Universidad y cuyos beneficiarios tampoco pertenecían a ella.

Con todo, ésta y otras universidades públicas son las que mantienen los mejores estándares académicos, la diversidad de su quehacer y un encomiable esfuerzo por irradiar cultura y ciencia al país. Lo que no es tan difícil en medio de tantos planteles que quieren rentabilizar al máximo y, por lo mismo, incumplen con la investigación y extensión. Aunque parezca contradictorio con lo que hemos planteado, debemos señalar que existe en Chile una indicación legal que prohíbe lucrar con la educación universitaria. Norma, por supuesto, que en la práctica se burla absolutamente por las imaginativas triquiñuelas discurridas por sus propietarios. Muchas de las actividades propias del quehacer universitario son encomendadas y muy bien pagadas a corporaciones privadas de los mismos dueños. Tal como el activo inmobiliario de campus, aulas y hasta hospitales enteros son de propiedad de otras entelequias jurídicas, en las que se asocian también los mismos nombres.

Es decir, los propietarios de estos planteles capitalizan por fuera de éstos los buenos dividendos proporcionados por la gestión de las universidades, el pago de los estudiantes y la rentabilidad de los proyectos de investigación que se asumen. De

otra manera no se explican las millonarias transacciones de algunas universidades privadas de la que el país ha sido atónito testigo.

En la prensa se informa en estos días de los juicios en que se debaten los herederos de un millonario fundador y rector de una de estas universidades privadas que, desquiciado por los celos, ocasionó uno de los más terribles crímenes e nuestro archivo policial. Con el trágico resultado de su propia muerte al ser abrazado por las llamas que provocó a su inocente víctima.

Los planteles públicos siguen destacándose en Chile por la excelencia de muchos de sus académicos e investigadores, que muchas veces desestiman oportunidades personales en la esperanza de que la democracia recupere el sitio que tuvo la educación del Estado. Sin embargo, es poca la importancia que le asignan nuestros gobernantes al valioso y sistemático aporte que desde las aulas éstos podrían realizar al diseño de políticas públicas. Las situaciones más expresivas de este desdén de los políticos hacia los establecimientos estatales se dieron con ocasión del proyecto metropolitano del Transantiago, las reformas emprendidas en el ámbito de la justicia y un conjunto de iniciativas par revitalizar la salud pública que, también, cayó en desgracia y se encuentra ahora en severa crisis después de las privatizaciones.

En efecto, aunque las facultades de ingeniería y economía de las universidades del Estado gozan hasta hoy de inigualable prestigio, no se recurrió a ellas para participar en el diseño y las posibilidades de financiamiento de un nuevo sistema de transporte público para la Capital. Se prefirió, en cambio, contratar millonarias asesorías privadas que finalmente se mostraron incapaces de realizar un proyecto adecuado a las demandas de movilización de más de cinco millones de santiaguinos. Al grado que, después de dos años, el Transantiago se ha convertido en el dolor de cabeza más severo de los políticos y en una verdadera calamidad para nuestro presupuesto fiscal por el abultado déficit que arroja su precaria operación. Sin que la población aprecie todavía sus ventajas respecto del cuestionado sistema antiguo.

Tampoco las facultades de Derecho de estas universidades fueron demandadas para la implementación de varias y notables reformas a los sistemas de administración de justicia, rehabilitación carcelaria y otras que, más allá de sus loables propósitos y consenso político logrado para su ejecución, en la práctica tienen colapsados a los tribunales de nuevo por una concepción ni implementación que no tuvieron en cuenta la magnitud y el impacto de los cambios. En el momento de escribir estas líneas, la Cámara de Diputados arroja un informe unánime referido a la infame situación de los hospitales y otros servicios de salud pública, pese a los ingentes recursos destinados para modernizar los sistemas y la infraestructura donde se atienden los pobres que, por supuesto, no son del interés de las clínicas privadas. Probablemente muchos inconvenientes de habrían evitado si nuestras escuelas de medicina y salubridad hubieran sido demandadas por los gobiernos, a cambio de las

caras e ineficientes consultorías que se organizaron para “hacerse” de las licitaciones fiscales. Muchas veces, al precio de corromper a los políticos de turno y funcionarios públicos que toman las decisiones y participan en la ejecución de éstas.

Así como las universidades públicas sirven ahora menos al Estado y a la nación chilena, hay entidades privadas que penetran intensamente en la administración pública y las decisiones de nuestros gobernantes. Más que por sus militancias políticas, ministros de estado y altos funcionarios públicos son identificados ahora por su adscripción a corporaciones o referentes intelectuales la mayoría de las veces solventados desde el extranjero o por universidades transnacionales que han irrumpido en nuestro país, interesados en el doble negocio de impartir toda suerte de carreras profesionales e ilusiones para la juventud chilena, como intervenir en las políticas de desarrollo científico y tecnológico. De esta forma es que se teme que las decisiones que se adopten próximamente en materia de energía hagan caso omiso de los diagnósticos y prevenciones de los investigadores de las universidades serias, preocupados por cierto de promover el crecimiento sustentable y el bien común de los chilenos.

Sabemos que la estrechez de recursos afecta las tareas de extensión universitaria. Desgraciadamente, lo primero que suprimen o restringen nuestras autoridades son sus medios de comunicación y todo aquello que se vincule a la difusión de la tarea docente y de investigación. Pero de lo que no se han dado cuenta nuestros planteles es que, al afectarse la extensión, inexorablemente se le está poniendo candado a la expansión de las otras dos tareas clásicas de la universidad. Así como la docencia se anquilosa sin investigación, ambas se degradan o desnaturalizan si éstas no se orientan en el objeto de servir a sus países, a su presente y futuro. Una universidad que no ilumina a la sociedad, y una sociedad que no inspira y vigila su educación superior, fomentan planteles aislados y acotados al mero trámite de fabricar egresados y repartir títulos de pre y post grado.

En esta realidad, cada vez está más marcado por la presencia de entidades públicas y privadas que sólo compiten por captar alumnos, los recursos que podrían destinarse a la extensión universitaria son desplazados a financiar febriles y onerosas campañas de marketing para conseguir clientela estudiantil. Las universidades que vivían de su histórico prestigio, tanto públicas o privadas, empiezan a sucumbir al influjo de las entidades comerciales servidas por eficientes empresas de publicidad que les producen papelería de lujo, avisaje en la televisión y hasta coloridos paneles en los estadios de fútbol, *pubs* y discotecas. El “gancho” es la posibilidad de obtener un título en edificios de 5 estrellas y sin tantas exigencias y compromisos más allá de estar al día en el pago de sus colegiaturas. No se ha hecho el cálculo preciso, pero estamos ciertos que los medios de comunicación aprecian en la competencia de imagen una excelente oportunidad de contratar avisos, emisiones de radio, de televisión e insertos de toda índole en los diarios y revistas. Muy probablemente

sean las universidades, los preuniversitarios y otra suerte de academias las que más contribuyen al sostenimiento de algunos órganos de prensa. Al menos en nuestro país.

La esperanza es que en Chile las autoridades universitarias del sistema estatal reaccionen a tiempo frente a este fenómeno y demande se sus estados los recursos necesarios para sostener una actividad que procure la excelencia en los tres ámbitos de su histórico quehacer. La ausencia de estos planteles en la definición de las políticas públicas, con los lamentables resultados que comentamos, debieran estimular un nuevo contrato del Estado con sus universidades en beneficio del país y la posibilidad de producir egresados íntegramente formados en las ciencias, la filosofía, las artes y otras fuentes del saber más allá de su acotado currículo profesional. En efecto, si la especialización es cada vez más necesaria en la formación académica, lo cierto es que también los países requieren de personas cultas, con una sólida formación interdisciplinaria y ética. Y en ello, debe radicar el prestigio y el valor agregado del sistema universitario público y de las universidades privadas que también se proponen la excelencia académica.

Justamente, la constatación de que las áreas de ciencias sociales, humanidades, artes y comunicaciones han languidecido en la implantación de la universidad profesionalizante, llevó recién a nuestra Presidenta a ofrecer una cuantiosa cantidad de dinero, por una sola vez, para la recuperación de las facultades correspondientes en la Universidad de Chile y otras entidades públicas. Ojalá este sea el inicio de una nueva relación del Estado con sus planteles, en la que se reconozca la necesidad que tienen los países de tener sólidos pensadores, creadores, artistas, comunicadores sociales y otros en el cometido de la formación intelectual de los pueblos.

Las universidades deben recuperar o fortalecer, según sea el caso, su inserción en el devenir de sus países. Para ello deben sostener medios de comunicación eficientes que lleguen a la población y de ésta se nutran para orientar la actividad académica; medios independientes y con sentido crítico que en ningún caso sirvan a las relaciones públicas de las autoridades universitarias o a los gobiernos de turno. Que induzcan a los profesores e investigadores de sus planteles a participar de los debates nacionales, de los desafíos de la globalización y de sus realidades locales. Atentos al progreso mundial, como inmersos en sus propias circunstancias. Que sean alternativa, asimismo, en sus comunidades a aquellos medios entregados a las leyes de la oferta y demanda publicitaria, regidos también por el afán de lucro y, por ende, entregados a la banalidad informativa, a la vulgaridad de sus espacios de entretenimiento. Cuestión tan recurrente en nuestros países en que, en general, la prensa ha renunciado a su noble propósito de informar y educar.

Lo que se requiere es más radio y televisión públicas, diarios, revistas, sólida presencia en la *web*, este magnífico instrumento que se ha abierto a la

democratización de las comunicaciones y que, de extenderse, debiera llegar a romper con las fronteras nacionales y las censuras hegemónicas. Universidades que piensen y desarrollen medios de comunicación que interlocuten constantemente con sus naciones. Que exijan, asimismo, la visión orientadora de sus maestros e investigadores. Estados que mantengan o recuperen su confianza en la educación pública de calidad y garanticen la gratuidad para los que no pueden pagar sus estudios. Probada fórmula, por lo demás, para avanzar en la equidad social y cultural de nuestras naciones. Como se desprende de la responsabilidad de tantas naciones del continente que, al igual que Chile, se postraron frente a la ideología de la desregulación de la economía y el consumismo insensatos, pero que al menos no renunciaron al deber de sus estados por servir a una educación que no discrimine en el derecho de todos los niños y jóvenes a comprender en mundo y crecer con él. Procurando, con ello, servir a uno de los principales cometidos educacionales, cual es la formación de servidores públicos y agentes de la justicia social. Única forma de conseguir la paz interna y exterior.

Me parece que es así en toda nuestra América Latina, pero cuando en Chile los sondeos indagan sobre el pensamiento y los sentimientos de la población, lo que se aprecia es la esperanza que hoy mantienen nuestros pueblos en alcanzar el bienestar de sus hijos y nietos, más que el beneficio propio. La opinión pública tiene claro que la educación es un derecho y la oportunidad de arrancar de la miseria y la segregación social. Por lo mismo que se asume que las universidades deben abrir sus puertas al talento y vocación de los mejores, más allá de su condición socioeconómica.

La sociedad civil también le asigna a las universidades, sobre todo a las públicas, una credibilidad y confianza muy superior a la de las instituciones políticas, las fuerzas armadas, las propias iglesias y los medios de comunicación. Pese a los millonarios recursos comprometidos en el marketing universitario que comentamos, un reciente sondeo dado a conocer la semana pasada en Chile da cuenta que la inmensa mayoría de los estudiantes secundarios (los nuevos pingüinos) aspiran a ingresar a la Universidad de Chile y otros establecimientos del sistema público, pero ya se refleja el peligroso posicionamiento que logran algunos planteles que sabemos son muy deficitarios en su oferta académica, pero gastan mucho en propaganda.

De esta forma es que la extensión universitaria debe proponerse vínculos estrechos con la sociedad. Renovarle proyecto histórico a nuestros gobiernos y emprendedores sirviendo a la ética del servicio público, del progreso con equidad y el respeto del medio ambiente. Al mismo tiempo que nutrir en este diálogo el trabajo académico para que salga de su campana de cristal y atienda en su docencia e investigación al interés nacional y global. Tarea que se ejerce con la sustentación de medios de comunicación que velen, asimismo, por cumplir con su propio objetivo misional: abrir los ojos al entendimiento, ser voz de los pueblos y agentes de su liberación.



Consolidar prestigio en este histórico deber ser de la educación superior.

*\*Ponencia presentada en Foro Taller “Manejo de las Comunicaciones en las Universidades Públicas”. Universidad Nacional de Colombia, 19 de noviembre, 2008.*

*\* El autor es profesor titular del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y director de la Radio del mismo plantel.*